

Radiografía microscópica del horror

Plan Colombia. Atrocidades, aliados de Estados Unidos y activismo comunitario

JOHN LINDSAY-POLAND

Universidad del Rosario, Bogotá, 2020, 362 pp.

EL 21 de febrero de 2005 fueron asesinadas ocho personas en la zona rural de San José de Apartadó (Antioquia), tres de las cuales eran niños. De inmediato, el Ejército dio la versión de que esa masacre era responsabilidad de las FARC. Los grandes medios de comunicación difundieron dicha versión, y a ello se agrega que, según sostuvo el presidente de la República, los miembros de esa comunidad de paz eran guerrilleros y responsables de lo sucedido, al no permitir el ingreso de los miembros de las Fuerzas Militares. Pronto se empezó a desmoronar este entramado de mentiras, y se demostró que el Ejército había cometido la masacre.

Este hecho, concreto y perfectamente localizado en el tiempo y en el espacio, es uno más entre cientos de casos similares que se han presentado en nuestro país durante los últimos 75 años. Examinarlo en detalle, con una especie de microscopio analítico, proporciona elementos para entender la Colombia contemporánea. Justamente, esto es lo que hace el investigador John Lindsay-Poland, ciudadano de los Estados Unidos, con una amplia experiencia en estudio y denuncia de las múltiples tropelías que su país ha cometido en nuestra América en las últimas décadas. En su indagación, él parte de esta pregunta: “¿Qué tuvo que ver Estados Unidos en la masacre de San José de Apartadó?” (p. 21).

A partir de esa cuestión, el autor hace un recorrido analítico para desenmarañar la madeja de la represión del Estado colombiano y la función que ha desempeñado Estados Unidos como financiador y sustento político de la guerra interna que vivimos desde mediados del siglo pasado, que el autor califica como la “guerra más larga” de todas las que ha librado Estados Unidos. No por casualidad el general Mario

Montoya, comandante del Ejército entre 2006 y 2008, le dijo a Lindsay-Poland: “Estados Unidos es el único país que nos ha apoyado abiertamente. Han sido nuestros aliados incondicionales” (p. 19). Tal afirmación adquiere más relieve en la actualidad, si recordamos que dicho general está siendo juzgado por sus responsabilidades directas en los “falsos positivos”.

En ese marco general, el autor examina el Plan Colombia, que entró en marcha en 1999, y cuestiona la narrativa oficial que lo presenta como un éxito grandioso, con lo que se ocultan sus resultados nefastos de muerte y desolación en los campos colombianos. Demuestra que el Plan Colombia ha sido un negocio en el terreno económico, porque Estados Unidos “dona” millones de dólares para que el Estado colombiano compre equipos de guerra a empresas de ese mismo país, e indica que con ese plan se avalaron los estrechos nexos entre el Ejército y los grupos paramilitares, que existían desde antes de su implementación. Al respecto y como ejemplo, el autor menciona el caso de Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), un grupo de narcoparamilitares que estaba aliado con los servicios secretos de Estados Unidos, y proporcionaba las ordenes desde el Bloque de Búsqueda que perseguía a Escobar:

Los cables muestran que la DEA, el entonces embajador de EE.UU., Morris Busby, y los funcionarios del Departamento de Estado en Washington estaban al tanto de la colaboración entre sus clientes del Bloque y los Pepes pero nadie objetó. Se dice que los oficiales de la DEA hablaban con admiración de los Pepes y vestían camisetas alusivas a ellos. (p. 43)

Lindsay-Poland recuerda que de esa estructura criminal de Los Pepes salió Carlos Castaño, del cual se trazaba este perfil militar en cables secretos de los Estados Unidos: “[...] uno de los criminales más despiadados de Colombia [...] y cuenta con el apoyo de miembros antiguerrillas en el Ejército colombiano y la Policía Nacional de Colombia” (p. 43). A tal punto trasciende a largo plazo ese apoyo de Estados Unidos a Los Pepes, que según uno de sus cabecillas, Don Berna, “sin Pepes no hubieran existido las autodefensas” (p. 44).

De la misma forma, se evoca el papel que han desempeñado empresas de Estados Unidos, en especial Chiquita Brands, que reconoció su financiación a los paramilitares de Urabá, por lo que pagó una multa de 25 millones de dólares a un tribunal judicial de los Estados Unidos (p. 59).

El nexo más directo entre Estados Unidos y la masacre de San José de Apartadó se da a través de las “ejecuciones extrajudiciales”, conocidas como falsos positivos en el argot oficial, siendo Urabá una de las principales regiones de experimentación antes de 2002; porque en esa zona se exterminó de forma sistemática a militantes de izquierda, principalmente de la Unión Patriótica, y a dirigentes sindicales. Esos asesinatos fueron resultado de una coalición entre las élites políticas locales, los empresarios de la región, las Fuerzas Militares y empresas de los Estados Unidos. De esa alianza resultó lo que algunos políticos colombianos denominan una “gesta liberadora” (p. 59, nota 50), que dejó miles de muertos, desaparecidos y exiliados. Esto se presentó en Urabá por un proceso de movilización política y social vivido allí desde la década de 1970, lo que dio como resultado la construcción de sindicatos y el avance electoral de fuerzas de izquierda, erradicados ambos a sangre y fuego.

En medio de esa ofensiva contra la izquierda de la región, surgió la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que fue considerada, en el ámbito local y nacional, como una organización guerrillera. Sus miembros fueron perseguidos con saña, mientras los militares anunciaban: “Junto con los paramilitares tenemos que acabar con esos perros. A sangre y fuego tarde o temprano tomaremos a San José” (p. 99). La consecuencia de esta persecución no deja ninguna duda sobre lo que se consiguió: decenas de campesinos de la región fueron asesinados.

La masacre de San José de Apartadó le sirve al autor para analizar diversos aspectos de la sociedad colombiana, en sustanciosos capítulos, entre los que se destacan “Matando el futuro” (cap. 6) y “Proyectos de vida” (cap. 7). En estas páginas se recalca el esfuerzo hecho por comunidades campesinas, desde abajo, para construir sus propios proyectos, independientes y autónomos, al margen de la acción

HISTORIA		RESEÑAS
del Estado y reivindicando su intención de vivir en paz. El resultado ha sido la persecución y la calumnia sistemática por parte del Estado y sus fuerzas armadas, con el apoyo de los medios de información convencionales. Esto ha significado liquidar cualquier viso de esperanza en construir un país justo y democrático, al asesinar a los líderes de ese proyecto. No extraña que uno de los sobrevivientes de esa comunidad de paz afirmara en 2011: “No tenemos esperanza. Estamos trabajando para que llegue el momento en que amerite tener esperanzas” (p. 319). Los últimos capítulos del libro (del 9 al 13) se dedican a relacionar la presencia de los Estados Unidos en Colombia en el ámbito militar, siempre girando alrededor de la masacre de 2015. Este es el eje analítico que conduce a indagar sobre la manera como la lógica contra-insurgente de los mal llamados falsos positivos se manifiesta en casos concretos, en los que se reproduce el mismo modelo: se ejecutan campesinos, se dice que eran guerrilleros o terroristas, el Ejército difunde esa imagen que los medios de información amplifican, los altos cargos civiles y militares del Estado reafirman esa versión, y en el imaginario de la población queda la impresión de que ha sido un contundente golpe que el Estado le propinó a la insurgencia. Con pocas variaciones, este guion criminal se reprodujo a vasta escala durante el período 2002-2010 en Colombia, período de implementación del Plan Colombia y de injerencia directa de Estados Unidos en el conflicto interno del país. A las muertes que resultan de esa injerencia el autor las denomina “asesinatos legalizados”, como se evidencia con este hecho: “Entre 2000 y 2010, mientras Estados Unidos administraba su asistencia a las fuerzas armadas colombianas, [estas] cometieron 5.763 ejecuciones extrajudiciales fuera de combate” (p. 211). Tales prácticas se incentivaron con premios y condecoraciones, a partir del presupuesto, made in USA, de medir el éxito militar en litros de sangre, como lo admitía un comandante del Ejército colombiano (p. 223). El autor resume de esta forma el argumento que atraviesa todo el libro: La intervención militar estadounidense en Colombia desde el inicio del Plan Colombia en 2000 hasta su	pico en 2007 expandió sus propósitos y creció dramáticamente en escala y alcance geográfico. Esto ocurrió a través de la inversión de Washington en doctrina, escuelas, infraestructura, oficiales y el éxito de los militares colombianos en el campo de batalla. A medida que los militares colombianos entrenados por Estados Unidos eran trasladados desde y hacia las brigadas del Ejército en todo el país, la influencia estadounidense también se extendió. Por lo tanto, es difícil aislar una parte del Ejército colombiano exenta de esa influencia, incluida la Decimoséptima Brigada, que estuvo profundamente implicada en una serie implacable de abusos en San José de Apartadó, entre ellos la masacre del 21 de febrero de 2005. (p. 139) En este libro se recalca la dignidad de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que en medio de la represión, la calumnia y la impunidad mantiene su proyecto de vida, porque [...] al final ni los senadores estadounidenses ni los presidentes colombianos definen la memoria de una comunidad ni dictan la dignidad con que viven sus miembros. En San José, los miembros vivos de la Comunidad de Paz recuerdan a los que murieron y continúan cultivando la tierra. (pp. 324-325) Este trabajo se ha escrito a partir de muchas fuentes, documentos oficiales de Estados Unidos y sus agencias de seguridad, entrevistas con militares colombianos, testimonios de los miembros de la comunidad de paz, publicaciones de ONG, así como diversas instancias de Colombia y de Estados Unidos. El libro está bien elaborado, es serio y riguroso. Solamente se ha encontrado una imprecisión cuando se afirma que Francisco Santos fue secuestrado por las FARC (p. 150), lo cual no es cierto, porque fue raptado por los sicarios de Pablo Escobar. En las continuas referencias a los “falsos positivos” utiliza las palabras “supuestos” o “presuntos”. Hoy sabemos, gracias a la Jurisdicción Especial para la Paz, que no son supuestos sino reales, es decir, los “falsos positivos” son el asesinato de miles de colombianos por parte de las fuerzas armadas. Y este libro es	una importante contribución al conocimiento de esa horrorosa página de nuestro presente. Renán Vega Cantor